

# **Perspectivas de las Ciencias Sociales en América Latina**

Juan Carlos PORTANTIERO

Universidad de Buenos Aires

Working Paper n.5

Barcelona 1989

1. No resulta posible una reflexión sobre las oportunidades y los desafíos que se abren a las ciencias sociales en América Latina, sin partir de un cuadro de situación centrado en el proceso de crisis y de transformación que están atravesando las sociedades a escala mundial. El continente latinoamericano vive ese momento de una manera particular, determinado por su posición dependiente frente a los grandes poderes hegemónicos, que limita su capacidad de decisión autónoma. A partir de la década de los 80 la crisis internacional comenzó a sentirse con dureza en la región. Su síntoma más espectacular fue el estallido de la cuestión de la deuda, expresión cabal en las actuales condiciones de predominio del capital financiero sobre el capital productivo de las nuevas formas de dependencia.

La crisis actual ha sido comparada con la que tuvo lugar en los años 30 y que constituyó el impulso para un proceso de transformaciones tecnológicas, económicas, políticas y sociales que cambiaron la imagen del continente. Pero posiblemente las características de esta crisis de fin de siglo tenga más similitudes con la del fin de siglo anterior, crisis larga y mucho menos catastrófica en sus manifestaciones que la de 1930. Esta crisis (conocida como «la gran depresión» de 1873-1890) promovió una de las transformaciones más importantes del sistema capitalista al promover un capitalismo dual, organizado, frente al meramente competitivo. En el caso de nuestro continente, abrió las puertas para su integración de manera acelerada al mercado mundial.

Lo que interesa señalar, a partir de estas comparaciones, es que la forma que asume la crisis en el mundo y en América Latina se compagina más con un largo proceso de reestructuración que con la idea de una catástrofe súbita. La distinción es importante para el conocimiento científico y para la práctica social, pues abre caminos para la acción y especifica la perspectiva de trabajo de las ciencias sociales.

La crisis actual, si no la consideramos con la óptica de un economicismo estrecho, revela una insospechada dimensión proyectual, una productividad particular.

Encarada en su aspecto activo y no pasivo, es decir, poniendo más énfasis en los actores que en el sistema, la crisis no aparece como una «defunción», ni como la expresión de «contradicciones» que estaban presentes en la estructura como una ley natural de su desarrollo. No sólo como destrucción, sino como capacidad de transformación construida por los proyectos de los sujetos sociales. La crisis vuelve así a su raíz semántica y es vista como decisión, como momento en que se

anuncian cambios. Despojada de su aire catastrofista, la crisis es generadora de desafíos y oportunidades. Y así como su origen no fue mecánico, sino social, sus consecuencias estarán también marcadas por la acción colectiva.

2. Pero la crisis actual latinoamericana se sitúa en una larga secuencia histórica, de la que emerge. Así, todos los analistas coinciden en señalar que, entre finales de la II guerra mundial y comienzo de los años 80, la región atravesó por intensas transformaciones. En los años 70, cuando ya los centros hegemónicos habían comenzado su ciclo recesivo, el auge se mantuvo en muchos países gracias al inicial espejismo provocado por el flujo del crédito internacional y alimentado por el reciclaje financiero de los «petrodólares».

Sin embargo, a principios de la presente década, la vulnerabilidad de las sociedades latinoamericanas se mostró en toda su amplitud y profundidad. Las grandes transformaciones operadas en la estructura productiva (en algunos países ya desde la década de los 30), expresadas sobretodo, aunque no únicamente, en la mayor centralidad de la industria, no llegaron a afectar decisivamente el clásico perfil latinoamericano de heterogeneidad social, sino, en todo caso, a modificar algunos de sus rasgos, en especial los referidos al tipo de marginalidad prevaleciente. Hacia 1970, por ejemplo, un 40% de la población latinoamericana vivía en condiciones de pobreza crítica y nada permite afirmar que esas cifras se hayan modificado en sentido positivo. Resulta difícil pensar en las perspectivas de desarrollo de las ciencias sociales en América Latina sin tener en cuenta datos como éste. Pero magnitudes agregadas de ese tipo, que consideran al continente como una unidad, no nos sirven para dar cuenta de otro tipo de heterogeneidad no situable en el interior de los países, sino entre ellos. La heterogeneidad de situaciones obliga a muchas reservas en el tratamiento de la región como globalidad, pero sin embargo no impide la posibilidad de formulación de algunos juicios generales, referidos tanto al momento expansivo, cuanto al de crisis, y aún menos el intentar la complementariedad de los análisis particulares. Crisis y expansión tocaron a todos los países, más allá incluso de situaciones profundamente diferentes como sería, en el caso extremo, la de Cuba, que también sufre hoy, como las otras sociedades socialistas, del carácter planetario de la crisis presente. De todas maneras las condiciones de recepción de esos fenómenos generales, que implican un mix particular de desarrollo económico, estructura social y demográfica, sistema político e identidad cultural, especifican las formas de su impacto. En el momento inicial, expansivo, fijado en la postguerra, la expresión que sella la época y que domina los años 50 y 60 es la de modernización. Un término que, como veremos más adelante, retorna en estos días aunque sus contenidos no sean los mismos.

Esa modernización prometida se asentaba sobre un trípode que combinaba industrialización, urbanización y capacidad planificadora del Estado. El resultado fue, en efecto, una modernización global de esas sociedades. Se estableció un nuevo modelo de estratificación con el surgimiento de nuevos grupos sociales; varió la composición interna de los sectores populares y se expandieron nuevos sectores medios. Los empresarios industriales junto con la burocracia estatal, intentaron conducir el proceso de desarrollo modificando el tradicional juego de poder y la industria creció al amparo del modelo mundial de transnacionalización productiva. Cualquier análisis socioeconómico de la región en esa época —empezando por los pioneros de CEPAL— acredita con precisión la vigencia de esos nuevos rasgos. Y las ciencias sociales, como veremos, fueron entonces causa y resultado de esa modernización general.

Algunos países «grandes», como Brasil, México y Venezuela, se transformaron radicalmente en ese período. Un segundo grupo de países más pequeños, que partían de niveles más bajos tuvieron, en términos relativos, cambios aún más pronunciados. Otros, en fin, como los del Cono Sur, que habían vivido procesos más tempranos de desarrollo, aprovecharon menos la oportunidad y su crecimiento fue menor. Desde los años 70 su decadencia fue pronunciada y el carácter más complejo de la crisis —por la misma densidad social de sus estructuras internas— provocó la emergencia de formas brutales de autoritarismo. Un rasgo cultural profundo de gran significación es que estas sociedades habían atravesado ya los impactos modernizantes del capitalismo entre finales del s. XIX y principios del s. XX. La modernización de la segunda postguerra fue, en todo caso, una segunda modernización. Esas sociedades del Cono Sur coinciden como «colonias de población» que ocupan espacios semivacíos a partir de la presencia masiva de enormes conjuntos inmigratorios europeos, que en una generación modificaron la estructura social y cultural de esas regiones.

Los otros países, en especial los andinos y centroamericanos (incluyendo a México) vivieron una modernización más tardía, que se precipitó precisamente en los años 50, y que no asumió las formas del «europeísmo» sino las del «americanismo», en la medida en que se produjo cuando el polo hegemónico del capitalismo se desplazó de Europa a Estados Unidos. La «segunda modernización» en los países del sur de la región ayudó menos aún que en los otros a consolidar un sistema relativamente integrado y homogéneo, como suponía cierta literatura sociológica optimista de esos años. El desarrollo de los 50 y los 60 ocasionó un crecimiento de la participación y la movilización sin que existiera una malla de institucionalización capaz de contenerla. Cuando la recesión económica marcó las limitaciones para el desarrollo productivo, sus efectos fueron deletéreos sobre toda la trama social, al recaer sobre dos puntos básicos de sostén del

sistema: el dinero y el poder. Inflación e ingobernabilidad condujeron, en medio de una seria crisis de identidad colectiva, a la salida trágica de las dictaduras militares.

3. La crisis de los años 80 habrá de ayudar a la comparabilidad de situaciones en la región que parten de matrices económicas y socio-culturales diferentes. Con su estructura de larga duración, envuelve al continente en una onda común de riesgos y desafíos. Es, en verdad, una «crisis de época». La oportunidad que abre es doble: consolidar la democracia como régimen político y transformar los modos sociales de acumulación y distribución. La crisis actúa, así, sobre dos niveles de transformación: los que hacen al patrón de acumulación y los que hacen al patrón de hegemonía. La distinción es ciertamente analítica y, en tanto así, sólo útil expositivamente: en los procesos históricos las dos dimensiones se interpenetran. Pero vale el recurso para marcar la complejidad estructural de la crisis presente y el tipo de tensiones que genera, a partir de las dificultades para hacer compatibles el deseo de conseguir y consolidar la democracia con la necesidad de encarar profundas transformaciones en las estructuras económicas. Este dilema marca hoy la política y la reflexión sobre la sociedad y la política. Las nuevas demandas, que la crisis genera y que a su vez la definen exigen nuevas respuestas, superadoras del pasado. ¿Cuál es ese inmediato pasado intelectual en trance de ser superado? No habremos de trazar una pormenorizada historia de las ideas, pero es imprescindible siquiera un breve esbozo de los antecedentes que nos llevan a la discusión actual.

Hay un primer momento de la etapa «adulta» de las ciencias sociales en el continente que se consolida alrededor de la década del 50. Coincide con la aludida modernización de nuestras sociedades y de hecho es un componente significativo de la misma. El desarrollo (económico, social, político) es el tema de estas nuevas ciencias sociales en el momento de su profesionalización y su incorporación al cuadro de los saberes como una especialización universitaria que reemplaza a la globalidad genérica del «ensayo». La secuencia Tradicional-Moderno habría de constituir el eje de la reflexión, marcada por un tono de optimismo histórico y epistemológico. El segundo eje derivaba de la voluntad de «cientificar» el conocimiento social a partir de los marcos teóricos del funcionalismo, predominante entonces en la vida académica de los países centrales. La sociología dejaba de lado una visión crítica, «colonizaba» a la ciencia política y se transformaba en un conocimiento prescriptivo sobre los buenos caminos del cambio social. Su optimismo histórico coincidía paralelamente con el momento sin igual del auge económico en el capitalismo central y se montaba sobre la viabilidad de acoplarnos a esa línea universal de progreso. En esta perspectiva, el conocimiento se construía poniendo más énfasis sobre el sistema (y los

subsistemas) que sobre los actores, a los que se veía, en todo caso, como grandes agregados: el Estado, los sectores medios, los empresarios, los grupos populares.

Este primer gran paradigma, que influyó no sólo en la actividad académica sino también en la vida política a través de una serie de experiencias reformistas, entró en crisis a mediados de la década de los 60. El cambio estaría enmarcado por significativas modificaciones políticas, en primer lugar el triunfo de la revolución cubana. Eran los años de auge de la llamada «Teoría de la Dependencia», que surgía en crítica inmediata al pasado «optimista» de las ciencias sociales y alcanzaría una rápida expansión continental, apoyada por la red institucional que se había generado en esos años.

En su dimensión política, el «dependentismo» era una recusación agresiva contra el «desarrollismo». La figura de intelectual que se proponía era también la contracara del momento anterior. El intelectual funcionario y planificador sería reemplazado por el militante comprometido con la ruptura y el cambio, no ya progresivo sino revolucionario.

Sin embargo, desde el punto de vista de ciertos nudos conceptuales, se mantenía una visión en el nuevo paradigma. En primer lugar, su propia tentación globalizante, su ambición (ciertamente frustrada) de constituirse en una teoría general capaz de dar cuenta de la situación del continente. En segundo lugar, la voluntad de mantener los análisis de situaciones en términos de una lógica del sistema, con lo que también se replegaba la dimensión de los actores. No es extraño que una visión de tal tipo primara, en la medida en que el marxismo crítico que servía de fundamento teórico al «dependentismo» estaba fuertemente influido por la vague estructuralista, sobre todo de origen francés, que venía entonces desde los centros intelectuales.

Como es sabido, las visiones más extremas del paradigma de la dependencia tendían a polarizar el análisis de los conflictos en dilemas radicales. Uno clásico, fue el de «Socialismo o Fascismo», simplificación de una premisa según la cual la crisis de nuestras sociedades había llegado a tales límites que excluía cualquier salida intermedia. En la medida en que el intelectual «dependentista» se planteaba una intervención política, sus predicciones formaban parte de las tendencias de la realidad. Podían ser profecías que se autorealizaban. De hecho lo fueron, pero no en la dirección deseada. En varias sociedades los antagonismos adquirieron ese carácter radical, pero el polo que triunfó no fue el del cambio hacia adelante sino el del retroceso a formas brutales de autoritarismo. Comenzó con ello una nueva etapa en la reflexión sobre la sociedad en América Latina. Si en el primer ciclo de la profesionalización de las ciencias sociales (tanto

en su fase «desarrollista» como en su fase «dependentista») privilegiaban al análisis sociológico o económico, de donde extraían conclusiones políticas en una operación conceptual no siempre prolija, el segundo ciclo en cuestión implicó una suerte de revancha de la ciencia política sobre la sociología. Revancha que finalmente se resolvió en el predominio de una dimensión de análisis, que llamaríamos de sociología política más que de ciencia política en sentido estricto.

Esta politización que siguió a la sociologización anterior reflejaba un desplazamiento del objeto de conocimiento. El Estado, visto como un tema derivado de la sociedad o de la economía ahora se autonomiza. Lo hace en la experiencia específica del autoritarismo militar (de variados signos, porque incluimos en la categoría como ejemplos extremos al Perú de Velasco Alvarado y al Chile de Pinochet) y lo hará también como objeto teórico.

Pero es cierto que en un sentido teórico, pese al desplazamiento temático, ciertos patrones «duros» se mantuvieron. De hecho, una de las respuestas más difundidas a la pregunta sobre la causa de los autoritarismos se orientaba hacia la economía. El «politicismo» de los análisis fue en muchos casos más aparente que real; era un «economicismo» disfrazado que analizaba ese reforzamiento de los poderes absolutos del Estado en clave de las necesidades del desarrollo capitalista, cuando éste llegaba a un punto en que debía profundizarse y colocar bases nuevas de acumulación, superada una fase inicial de industrialización. En rigor, como se vería más o menos rápidamente, la relación entre economía y política del capitalismo se planteaba más en términos de reorganización (que podía significar achicamiento) que de ampliación o profundización. Y esta reorganización, en la realidad y en la teoría, debía remitir a la complejidad de los procesos de cambio en el continente. Una complejidad que otorgaba carácter ilusorio a cualquier visión globalizante que pretendiera generalizar a priori un nivel analítico en desmedro de otro. La extensión de esta certeza, que habría de coincidir con una renovación en la temática que se considera crítica, caracteriza el momento actual de la reflexión. En efecto, si en los años 50 el tema dominante fue el de la modernización y las consecuencias sociales de la industrialización; si en la década del 60, frente a los problemas que planteaba la transnacionalización de la economía, el eje se desplazó a la dependencia; en fin, si en los años 70, el interés analítico viró hacia el Leviathan estatal, hoy son los problemas de la transición y la consolidación de la democracia los que virtualmente monopolizan el debate intelectual y político y la investigación científica.

Está claro que estos desplazamientos en los focos de interés no son gratuitos ni están generados en la soledad de los gabinetes, sino que responden a transformaciones que se operan en la realidad. Una línea de transformaciones que,

a la vez que marcan la inestabilidad de la situación del continente, hablan de la complejidad de los procesos históricos. En este marco se produce un doble fenómeno: a) la crisis de las respuestas totalizadoras y b) la rápida decadencia de los esquemas interpretativos, sus recurrentes crisis. La democracia aparece como el gran ordenador temático actual, como la clave unificadora de los desafíos teóricos para las ciencias sociales.

4. Como ha quedado señalado, la recuperación del tema de la democracia como horizonte de reflexión para la sociología y las ciencias políticas tiene lugar en momentos en que el continente atraviesa una crisis de época. ¿Se trata de una paradoja? En términos del paradigma de los 50 que concebían la posibilidad de la democracia en América Latina en función del desarrollo y la prosperidad, como el fruto maduro del progreso que podía producir la modernización creciente, la respuesta sería sin duda afirmativa. De hecho, existen opiniones que advierten sobre la ingenuidad de una visión que intente compatibilizar democracia con crisis. Una visión lineal, tanto «pesimista» como «optimista», que anticipe cuáles serán los resultados de los procesos en curso, no sería acertada. El tema consistiría, más bien, en tratar de plantear los desafíos que la situación pone de relieve y no en predecir su desenlace. Toda crisis moviliza proyectos y el de la democracia es uno de ellos. Seguramente en conflicto con otros. Éste es el punto crucial. Y la manera, además, en que el horizonte democrático redefine la perspectiva de desarrollo de las ciencias sociales. Una de las características de la crisis, quizá la más importante en cuanto a su incidencia directa sobre nuestro tema, es que hace estallar las visiones totalizadoras. La crisis es una crisis de certezas y por tanto de los grandes relatos estructurales.

Si el rasgo prevaleciente en todas las concepciones sucesivamente dominantes en las ciencias sociales continentales fue la reivindicación de lo que llamaríamos «mirada hacia el sistema», lo que desde los 80 parece dominar es la consideración sobre los actores. La desarticulación de los grandes ordenadores conceptuales junto con el reconocimiento de las heterogeneidades —internas e interregionales— favorece una rehabilitación de las preguntas históricas frente a las preguntas estructurales de años pasados. En esas condiciones, la captación de un orden, en la realidad o en la teoría, no es una operación a priori, no es un dato metasocial. Es una construcción, y como tal está a cargo de actores. Del modelo global se marcha a la valorización del actor, al reconocimiento de una autonomía creciente de lo que antes aparecía como sistemáticamente unificado. Por eso el revival de la cuestión democrática; no a pesar de, sino por la presencia de la crisis. Pero no se trata de la democracia entendida como un capítulo de ingeniería institucional (aunque esa dimensión también exista) sino como un proceso, como un espacio en movimiento en el que se constituyen identidades y con ellas un orden

de convivencia. Por cierto que ello plantea tensiones derivadas del conflicto entre incertidumbre y necesidad de decisión. Estas tensiones son parte principal del desafío que obliga al sistema político a jugar un difícil rol de intermediario entre el orden del Estado y la diversidad de los actores sociales.

5. Estamos en un punto del debate teórico en el cual la obstinada óptica «estructural» debe dejar paso a otros enfoques. En ese camino aparece una insospechada ayuda: la de algunos elementos incluidos en la nueva vague del pensamiento europeo y norteamericano, la del llamado «postmodernismo». ¿Cómo resulta eso posible? Una obsesión recurrente del pensamiento social latinoamericano ha sido el tema de la modernización. Eso viene de atrás, de los llamados ensayistas del s.XIX y principios del s.XX. En el surgimiento de la sociología profesional y científica asumió el rol de eje articulador de los análisis. La visión de una modernidad inacabada, incapaz de superar los obstáculos del tradicionalismo, aparece hoy también en las propuestas de cambio levantadas por el discurso democrático en muchos países del continente. ¿Qué tendría que ver esa voluntad con las premisas del llamado postmodernismo? Es un hecho que ese pensamiento tiene su origen en una cultura postindustrial, desarrollada en un nivel maduro del capitalismo al que América Latina está muy lejos de acceder. El primer problema, por lo tanto, sería el de la pertinencia de una recepción de sus contenidos.

Pero es cierto también que la característica sociológica esencial de la región es su heterogeneidad. Es decir, la mezcla de elementos arcaicos con otros que llamaríamos modernos, lo que marca un panorama muy diversificado entre las sociedades del continente y en el interior de ellas mismas. En ese cuadro con forma de mosaico, algunos temas del postmodernismo podrían también tener lugar, a condición que no se haga de ellos una recepción servil. Una concepción cada vez más extendida señala que si su consumo es creativo y no pasivo, algunos enfoques resultan útiles, en la medida en que coinciden con la evolución del propio pensamiento sociopolítico latinoamericano. La preocupación por la democracia, por ejemplo, puede recuperar elementos significativos para su análisis, en la medida en que el postmodernismo hace hincapié en el reconocimiento de la heterogeneidad, la diversidad y el pluralismo.

Las claves del postmodernismo se alzan contra las grandes visiones, contra los paradigmas absolutos, contra las teorías infalibles acerca del desarrollo de las sociedades. Se trata, en palabras de sus voceros, de la muerte de los «grandes relatos». Esta proposición encaja con la percepción cada vez más extendida sobre la ineficacia de teorías que se pretenden omnicomprensivas como las de la «modernización» o de la «dependencia». En esa dirección, contraria a las explicaciones «estructurales», el llamado postmodernismo propicia un

desplazamiento de objeto: desde la «sociedad» a «lo social»; desde el «sistema» a los «actores». En el entendido que ya no son útiles los paradigmas unitarios, las perspectivas lineales y las «leyes» que los acontecimientos ejemplifican, se revaloriza la preocupación por la micropolítica y, en lo social, por las demandas nuevas que se levantan por fuera de los grandes agregados o que suscitan temas antes excluidos de la lógica de los sistemas. Como se ha dicho, se trata de una rebelión contra los procesos sistemáticos, económicos y políticos, que han colonizado la cotidianidad, que han sometido los «mundos de vida». Estos reclamos pueden dar lugar (y de hecho así ha sucedido) al renacimiento de visiones conservadoras, o aun reaccionarias, reivindicadoras del tradicionalismo. Esto sucede cuando el pesimismo sobre el carácter emancipador de la razón atraviesa los límites de la crítica a la racionalidad instrumental y se transforma tout court en desprecio de la razón. Pero ni es necesario que así sea, ni la recepción que puede efectuarse de los temas postmodernistas debe implicar una aceptación sin inventario.

Se trata de ver en qué medida nos pueden ayudar a recomponer, fuera de la mirada implacable de las grandes teorías, la relación entre sociedad, economía y política para una práctica actual de la democracia que vaya más allá del garantismo clásico del constitucionalismo liberal. En ese sentido, su aportación, como estímulo, como sensibilidad, como propuesta de mirada, puede ser significativa para este desafío de plantear la democracia como respuesta a la crisis. Sobre todo, la idea de la autonomización de los actores sociales, antes subsumidos en la lógica estructuralista. El Estado, las instituciones políticas, los actores sociales adquieren identidad y dinamismo, frente a las imágenes reificadas de la economía, la política, la sociedad. Se trata, más bien, de lo económico, lo político, lo social, como dimensiones, como momentos de una unidad que debe ser construida y significada por la dialéctica histórica. Entre la tradicional dicotomía que separa «lo estatal» de «lo privado», característica del análisis sociopolítico latinoamericano, se abre paso la posibilidad de distinguir otra esfera, la de «lo público», en la que los organismos intermedios, los movimientos sociales, todo lo que puede expresar al aludido mundo de la micropolítica, adquieren un relieve especial. Y no sólo teórico sino también práctico, porque mentan la posibilidad de una auténtica construcción democrática. Todo ello, más que modificar la lista de los «temas» habituales de investigación, los resignifica en la perspectiva que es mucho más lo que la sociedad puede autoconstruir que lo que el Estado puede planificar. Y esto vale para todas las áreas en las que la sociología y la ciencia política latinoamericanas han trabajado por décadas: población, sistema educativo, políticas públicas, incorporación de tecnologías, movimientos sociales y partidos políticos, etc.

La democracia es un proyecto que en América Latina supone, para su realización, la transformación de la estructura económica, la ampliación de los márgenes de autonomía, el incremento de la participación y la recuperación o la creación de las instituciones políticas correspondientes. Estas tareas y la manera en que las ciencias sociales pueden contribuir a ellas, requieren una redefinición del rol de los intelectuales. Ya no es posible la versión primigenia, que nunca desapareció del todo, del «gran intelectual», nacida en el s.XIX y prolongada en el s.XX. Pero tampoco lo es la del sociólogo «profesional» que, se popularizó en los años 50, diestro en el manejo de la razón técnica. Ni la del intelectual «revolucionario» de los 60, réplica moderna del «gran intelectual» tradicional, preocupado sólo por los grandes problemas y las grandes teorías. En la actualidad, se debe rehabilitar el papel que el profesional de las ciencias sociales puede jugar en los procesos de cambio que exigen la democratización de sociedades en crisis, en que el Estado ideal, agente de transformación de la sociedad, cerebro de la planificación global, imaginado por los modernizantes de hace dos o tres décadas, simplemente no existe, devorado por su deterioro fiscal y administrativo.

Pero en donde lo social se expande y, por lo tanto, abre más espacios para estrategias sobre los actores y menos para un planteamiento global y abstracto sobre la macropolítica. En una palabra, se trata de sociedades en las que, como en los primeros pasos de la profesionalización de las ciencias sociales, pueden existir vías de reforma, pero en que, a diferencia de aquellos momentos, no tienen ya al Estado como interlocutor privilegiado.